

# LA UTILIZACION PACIFICA DE LA ANTARTIDA Y DEL OCEANO AUSTRAL EN EL DERECHO INTERNACIONAL CONTEMPORANEO

VALENTÍN BOU FRANCH  
*Universitat de València*

## I. INTRODUCCION.

Durante los largos años que duró la Guerra Fría, la sociedad internacional procedió a establecer regímenes convencionales específicos para los denominados espacios comunes (global common spaces). Lo que caracteriza a estos espacios, lo que realmente tienen en común, es la imposibilidad de los Estados de efectuar reclamaciones de soberanía sobre los mismos, prescindiendo de que en tales espacios se haya creado o no un régimen de gestión y utilización internacional más o menos universal.

Esta prohibición, a la que se subordinan los Estados a no someter a su soberanía nacional partes o todos los diversos espacios comunes, se implantó convencionalmente, con independencia de que sobre tales espacios existieran previamente reclamaciones parciales de soberanía estatal (1), o fueran espacios considerados *res nullius* (2). En el primer supuesto, se llegó a una original solución, consistente en congelar la cuestión de la adquisición de soberanía territorial y en prohibir la formulación de nuevas reclamaciones de soberanía territorial o la ampliación de las zonas ya reclamadas. Este es el caso del artículo IV del Tratado de la Antártida. En el segundo caso, se prohibió sin más todo intento de pretender reclamar por cualquier forma soberanía sobre estos espacios comunes. Este es el supuesto, por ejemplo, del artículo II del Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la

luna y otros cuerpos celestes (Londres, Moscú, Washington, 27 de enero de 1967) (3), del artículo 2 del Convenio sobre la alta mar (Ginebra, 29 de abril de 1958) (4) y del artículo 137.-1 del Convenio de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar (Bahía Montego, 10 de diciembre de 1982) respecto de la zona internacional de fondos marinos y oceánicos.

De estos espacios comunes, el continente antártico fue, sin duda alguna, el primero en el que un régimen convencional afirmó expresamente que debe ser utilizado exclusivamente con fines pacíficos. Por ello, analizaremos a continuación el alcance y contenido de este principio tanto en la Antártida, como en los mares circundantes, en los que este principio goza de matices diferenciales.

## **II. EL PRINCIPIO DE LA UTILIZACION EXCLUSIVAMENTE PACIFICA DE LA ANTARTIDA.**

### **1. Antecedentes y significado del principio.**

Las propuestas para que la Antártida se utilizara exclusivamente con fines pacíficos son anteriores al Tratado de la Antártida de 1959, pudiéndose encontrar antecedentes de esta fórmula en los diversos intentos que, desde 1948, se realizaron para lograr un régimen jurídico internacional en estas latitudes polares. El primero, sin duda, fue la denominada "Declaración de Escudero sobre un *modus vivendi* para la Antártida", propuesta formulada por el Gobierno chileno al de Estados Unidos en julio de 1948 (5). Un antecedente directo de esta fórmula se encuentra en la Declaración tripartita sobre demostraciones navales en la Antártida, hecha pública el 18 de enero de 1949 por la Argentina, Chile y el Reino Unido (6). Precisamente, con el título "Utilización pacífica de la Antártida", la delegación de la India propuso, el 21 de febrero de 1956 y el 15 de julio de 1958 a la Asamblea General de las Naciones Unidas (7), un acuerdo internacional para la utilización pacífica de los recursos antárticos, que incluyera, entre otras cosas, la no militarización de la región y la prohibición de efectuar ensayos nucleares. En ambas ocasiones, se vio forzada a retirar sus propuestas ante la falta de interés de los Estados interesados en la Antártida en discutir este tema en un foro mundial. No obstante, esta propuesta volvió a aparecer el 11 de febrero de 1958 en boca del Primer Ministro del Reino Unido, Sr. Harold Macmillan (8), convirtiéndose en un requisito imprescindible en la propuesta que los Estados Unidos formularon a principios de 1958 y que terminaría con la celebración del Tratado de la Antártida (9).

Dejando aparte estos antecedentes históricos, no cabe la menor duda de que el primer texto convencional en afirmar que un espacio dado debe utilizarse siempre exclusivamente con fines pacíficos fue el Tratado de la Antártida de 1959. El principio de la utilización pacífica de la Antártida aparece ya recogido en el mismo Preámbulo como el objetivo principal de este Tratado. El Preámbulo comienza afirmando "que es en interés de toda la humanidad que la Antártida continúe utilizándose siempre exclusivamente para fines pacíficos y que no llegue a ser escenario u objeto de discordia internacional", para concluir con la aseveración "de que un Tratado que asegure el uso de la Antártida exclusivamente para fines

pacíficos y la continuación de la armonía internacional en la Antártida promoverá los propósitos y principios enunciados en la Carta de la Naciones Unidas" (10).

La parte dispositiva del Tratado de la Antártida se inicia con la siguiente afirmación: «La Antártida se utilizará exclusivamente para fines pacíficos». El uso exclusivo de este continente para estos fines es una de las grandes innovaciones del Tratado de 1959. Con antelación al mismo, cabe recordar que la operación "Highjump", realizada por los Estados Unidos en estas latitudes en 1946, tuvo concretísimos objetivos militares, y que incluso la Declaración tripartita de 1949 insistía, no en la utilización pacífica de la Antártida, sino en la conveniencia de no mandar más buques de guerra de lo habitual.

Ni en el Tratado de la Antártida, ni en sus trabajos preparatorios, se discutió con detalle qué debía entenderse por utilización pacífica. Los primeros comentaristas (11) consideraron que la intención de las Partes signatarias era que abarcara a todo tipo de actividad no claramente identificable como de carácter militar. Ello suscita algunas dudas de interpretación, dado que no siempre los términos "pacífico" y "militar" son opuestos. Además, algunas actividades pacíficas, de carácter científico y por tanto conformes al Tratado, tienen implicaciones de uso militar (12). En todo caso, debe destacarse que el Tratado no crea ningún organismo que determine si una actividad concreta es o no pacífica (13).

## **2. La no militarización de la Antártida.**

Concretando el contenido de este principio, el art. I-1 expresa que, como consecuencia del mismo, "se prohíbe, entre otras, toda medida de carácter militar". Las palabras "entre otras" indican claramente que el principio de exclusiva utilización pacífica es más amplio que el de no militarización, pero no se determina cuál es la diferencia entre ambos principios. Aunque la no militarización está formulada de manera genérica, se especifican, sin agotarlos, sus posibles contenidos: la prohibición del "establecimiento de bases y fortificaciones militares, la realización de maniobras militares, así como los ensayos de toda clase de armas" (14). En esta relación abierta de medidas militares de carácter objetivo, influyó, sin duda, el recuerdo de las bases de submarinos nazis operando desde el Océano Austral durante la II Guerra Mundial, así como el temor de Australia, expresado durante la celebración del Año Geofísico Internacional, de que las bases científicas de la Unión Soviética en la Antártida posteriormente se convirtieran en bases militares con instalaciones de misiles.

El art. I-2 contiene una importante excepción al principio de no militarización. No se considera contrario al principio de utilización pacífica de la Antártida "el empleo de personal o equipo militares para investigaciones científicas o para cualquier otro fin pacífico". Esta fue una propuesta realista formulada por Chile y los Estados Unidos, dado que, tanto en 1959 como en la actualidad, el apoyo logístico de toda actividad científica ha sido realizado por los militares de cada país, por ser los únicos con la capacidad técnica y material suficiente para afrontar tal aventura (15). Sin embargo, al amparo de esta disposición se han señalado ciertos excesos en la práctica de los Estados presentes en la Antártida. Como consecuencia de las críticas formuladas por la U.R.S.S., los EE.UU. corrigieron en los años sesenta, la proporción de militares presentes en las bases científicas de los EE.UU. en

este continente (en la temporada antártica 1968-1969, frente a 30 científicos civiles, el número de militares de los EE.UU. ascendía a 213). Todavía hoy, el número de militares chilenos y argentinos triplica con creces al de científicos de estas nacionalidades presentes en la Antártida. Incluso se ha sugerido que el despliegue de bases científicas realizado por la U.R.S.S., ubicando dichas bases en territorios antárticos no muy propicios para la investigación científica, le ha servido para contar con la presencia de militares en los lugares más estratégicos de este continente (16).

Se ha afirmado que con estas disposiciones se desmilitarizó la Antártida para evitar la extensión de la guerra fría a esta región polar (17). Observación que merece dos comentarios. En primer lugar, como en la Antártida nunca han existido instalaciones militares, más que de desmilitarización conviene hablar de no militarización. En segundo lugar, lo que se pretendió evitar fue todo tipo de enfrentamiento militar en este continente, cualquiera que fuese su origen. Se pensaba sobretudo en los posibles enfrentamientos derivados de las distintas posturas nacionales sobre la soberanía antártica que, de facto, habían sido las únicas causas de manifestaciones de uso de la fuerza producidas en esta región polar hasta ese entonces.

Desde la adopción del Tratado de la Antártida hasta nuestros días, no se ha producido ningún enfrentamiento militar en este territorio. Se ha señalado que la eficacia de estas disposiciones sólo es constatable en tiempos de crisis o guerra internacional (18). Hasta la fecha, la Antártida se ha mantenido ajena al largo contencioso entre chilenos y argentinos en el asunto del Canal Beagle y a la guerra por las Islas Falkland/Malvinas entre el Reino Unido y Argentina. Ambos son los únicos conflictos que se han producido en las proximidades de este continente, y ambos con una clara proyección antártica (19).

### **3. La no nuclearización de la Antártida.**

Para alcanzar el objetivo de la utilización pacífica de la Antártida, y complementando el principio de la no militarización, se reguló el principio de la no nuclearización. A estos efectos, se dispone que: "Toda explosión nuclear en la Antártida y la eliminación de desechos radiactivos en dicha región quedan prohibidas" (art. V-1) (20). Esta disposición se introdujo tardíamente en la Conferencia de Washington, a propuesta de Argentina. Las delegaciones argentina y australiana solicitaron que, en un artículo distinto del primero, se prohibiese la realización de explosiones nucleares con fines pacíficos, a menos que se consultase previamente a todos los países miembros y se aprobase por unanimidad. Propuesta que fue objetada por la U.R.S.S., aduciendo la dificultad de distinguir entre explosiones nucleares con fines militares (prohibida por el art. I) y con fines pacíficos. La U.R.S.S. propuso que se prohibiese toda explosión nuclear, o que no se hiciese ninguna referencia explícita a las mismas. Tras las discrepancias de los EE.UU., y debido a la insistencia de los Estados del hemisferio sur, finalmente se aprobó la redacción del actual art. V-1 (21).

Dicho artículo prohíbe la realización de todo tipo de explosiones nucleares en la Antártida, incluidas las de fines militares, ya contempladas en el art. I-1, in fine, así como el vertido de desechos radiactivos. No prohíbe, sin embargo, otros usos de la energía nuclear. Así lo señalaron expresamente en la Conferencia de Washington los representantes de

Estados Unidos, Francia y Australia (22). Debe indicarse a este respecto que, tras más de 30 años de vigencia del Tratado de la Antártida, la única utilización de energía nuclear en este continente se produjo entre los años 1962-1972, fechas en las que la base científica McMurdo, de los Estados Unidos, fue mantenida por un reactor nuclear (23). Desde 1972, dado que no fue rentable económicamente, no se ha vuelto a realizar ninguna utilización de energía nuclear en la Antártida.

La disposición general del art. V-1 fue complementada por el art. V-2, según el cual, si se concluyese algún tratado internacional sobre la utilización de la energía nuclear, del que fueran partes todos los Estados Partes Consultivos en el Tratado de la Antártida, sus disposiciones serían aplicables a esta región polar. Esta última disposición fue interpretada, tanto por los Estados Unidos como por los primeros comentaristas, en el sentido de que la no nuclearización de la Antártida era una medida provisional: tan pronto como se concluyese un tratado internacional complementario, todo tipo de utilización de la energía nuclear con fines pacíficos, incluidos los ensayos nucleares, estarían permitidos en la Antártida (24). Afortunadamente, ningún tratado de este tipo se ha adoptado desde que el Tratado de la Antártida entró en vigor. No obstante, debemos señalar que dicha interpretación es bastante restrictiva. El art. V-2 se refiere a todo tipo de tratado sobre utilización de energía nuclear; no únicamente a los que permitiesen su utilización con fines pacíficos. Recientemente, se ha aducido la posibilidad de considerar aplicables en la Antártida la Convención de Viena de 1963 sobre responsabilidad civil por daños nucleares y la Convención de 1986 sobre la pronta notificación de accidentes nucleares y sobre la asistencia en casos de accidentes nucleares o emergencia radiológica (25). Dejando aparte el hecho de que no todas las Partes Consultivas en el Tratado de la Antártida son, como exige el art. V-2, partes en estos convenios, la mejor garantía para conseguir la no nuclearización de la Antártida consiste en no realizar en la misma ningún tipo de utilización de energía nuclear y, en la práctica, así lo han entendido las Partes Consultivas (26).

#### **4. Las garantías de la utilización exclusivamente pacífica de la Antártida.**

Para asegurar la no militarización y la no nuclearización de la Antártida, el Tratado de 1959 prevé varios tipos de garantías. Por un lado, deben mencionarse aquellas garantías que ya forman parte del habitual quehacer antártico. De este grupo de garantías, cabe destacar las tres siguientes. En primer lugar, la obligación de informar por adelantado de toda actividad que se piense realizar en la Antártida, información que expresamente deberá referirse a "todo personal o equipo militares que se proyecte introducir en la Antártida, con sujeción a las disposiciones del párrafo 2 del artículo 1º del presente Tratado" (art. VII-5). En segundo lugar, y sorprendentemente para la época en que se adoptó (27), se aprobó el derecho de todas las Partes Consultivas "a designar observadores para llevar a cabo las inspecciones previstas en el presente artículo" (art. VII-1). Estas inspecciones, que pueden ser unilaterales o multilaterales, abarcan a todo el continente antártico y no requieren el previo aviso (28). Mediante la utilización que se ha realizado de esta garantía, que sin duda fue el método más avanzado de control internacional de su época, no se ha denunciado ningún incumplimiento del Tratado de la Antártida ni ninguna situación capaz de poner

en peligro la utilización exclusivamente pacífica de este continente, incluida su no militarización y su no nuclearización. Finalmente, dados los altos costes financieros de las inspecciones, así como la imposibilidad real de realizarlas por parte de algunos Estados Partes Consultivos, las Partes Consultivas encontraron en “el intercambio de personal científico entre las expediciones y las estaciones en la Antártida” (art. III-1, b), un medio mucho más económico y directo de comprobar que estas disposiciones sean respetadas.

Por otro lado, existen otras tres garantías previstas en el Tratado de la Antártida que, hasta la fecha, no ha sido necesaria su utilización. La primera de ellas consiste en la obligación de solucionar pacíficamente toda controversia “concerniente a la interpretación o a la aplicación del presente Tratado” (art. XI), según los medios de arreglo previstos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas (29). Debe señalarse a este respecto que, cuando se celebró el Tratado de la Antártida, tanto el Reino Unido como los Estados Unidos intentaron mejorar el sistema de arreglo pacífico de controversias previsto en la Carta de San Francisco, proponiendo que se reconociera como obligatoria la jurisdicción del Tribunal Internacional de Justicia. Pese a que esta propuesta no salió adelante por la oposición decidida de la Unión Soviética, Chile y Argentina (30), la verdad es que desde la entrada en vigor del Tratado de la Antártida no ha sido necesario recurrir a ningún medio pacífico de arreglo. La segunda de estas garantías es la ambigua advertencia a los terceros Estados contenida en el artículo X del Tratado de la Antártida. Según esta disposición:

“Cada una de las Partes Contratantes se compromete a hacer los esfuerzos apropiados, compatibles con la Carta de las Naciones Unidas, con el fin de que nadie lleve a cabo en la Antártida ninguna actividad contraria a los propósitos y principios del presente Tratado”.

Ya sea por esta advertencia, o por cualquier otra causa, lo cierto es que ningún Estado tercero al Tratado de la Antártida ha realizado jamás en esta región polar actividad alguna que comprometiera la utilización pacífica de este continente, incluida su no militarización y su no nuclearización (31). Finalmente, debe ser igualmente tenida en cuenta la posibilidad que tienen las Partes Consultivas, expresamente recogida en el art. IX-1, a) de este Tratado, de adoptar recomendaciones que, una vez ratificadas devienen vinculantes, sobre el tema “uso de la Antártida para fines exclusivamente pacíficos”. El hecho de que después de más de treinta años, no se haya adoptado ninguna recomendación específicamente incluíble en este supuesto, es la mejor muestra de la escasa conflictividad práctica que han tenido las Partes Consultivas en cumplir el mandato de la utilización de la Antártida con fines exclusivamente pacíficos.

### **III. LA CUESTION DE LA UTILIZACION EXCLUSIVAMENTE PACIFICA DEL OCEANO AUSTRAL.**

Una vez comentado el alcance del principio de la utilización exclusivamente pacífica en su aplicación al continente antártico, conviene hacer exactamente lo mismo respecto de

los mares circundantes de la Antártida. El status jurídico del Océano Austral (32), y en particular la vigencia en el mismo de este principio, está fundamentalmente condicionado por el hecho de considerar al mismo contemplado dentro del ámbito geográfico de aplicación del Tratado de la Antártida, o regulado exclusivamente como una región más de la alta mar.

### **1. El ámbito geográfico de aplicación del Tratado de la Antártida.**

En principio, parece que definir el ámbito geográfico de aplicación del Tratado de la Antártida no tiene porqué ser una tarea compleja. Sin embargo, el criterio recogido en el artículo VI no fue adoptado hasta después de producirse grandes discusiones en las negociaciones preparatorias de la Conferencia de Washington de 1959 (33). Se manejaron varios criterios, como el del Círculo Polar Antártico (66° 33' S.) o la Convergencia Antártica (entre los 45° S. y los 60° S.). No obstante, las consideraciones geográfico-científicas se abandonaron en favor del criterio político-jurídico recogido finalmente en el artículo VI. Esta disposición define el ámbito geográfico de aplicación del Tratado de la Antártida de la siguiente manera:

“Las disposiciones del presente Tratado se aplicarán a la región situada al sur de los 60° de latitud sur, incluidas todas las barreras de hielo; pero nada en el presente Tratado perjudicará o afectará en modo alguno los derechos o el ejercicio de los derechos de cualquier Estado conforme al Derecho Internacional en lo relativo a la alta mar dentro de esa región”.

El límite de los 60° de latitud sur prevaleció, en definitiva, por coincidir con el extremo norte de la mayoría de las reclamaciones de soberanía formuladas en la Antártida (34). El ámbito de aplicación de este Tratado se define como “la región situada al sur de los 60° de latitud sur, incluidas todas las barreras de hielo”. Desde muy temprano se señaló la anomalía de que, usándose constantemente a lo largo de este Tratado el término “Antártida”, no aparezca en absoluto en su artículo VI (35). No hubo acuerdo sobre qué constituía la Antártida. Es más, no se sabía con certeza si la Antártida era un continente con un manto de hielo permanente o un conjunto de islas cubiertas por encima y entre sí con una capa de agua helada (36).

Esta duda planteaba a su vez el problema, fundamental en la Antártida, de establecer cuál es el status jurídico de los hielos del Océano Austral. Los hielos antárticos han sido descritos de la siguiente forma:

“Una de las características físicas más significativas de la Antártida es su manto permanente de hielo, que cubre el 98% del continente. El manto tiene un espesor medio de 2,160 metros y en algunos puntos supera los 4.500 metros. El hielo de la Antártida contiene el 70% de las reservas mundiales de agua dulce. Bajo el peso del manto de hielo, el continente está hundido unos 600 metros por término medio. Aunque se considera que la tercera parte aproximadamente de su

masa terrestre está situada por debajo del nivel del mar, su altura media es la mayor de todos los continentes: 1.800 metros. El manto de hielo se desliza hacia el océano desde el interior elevado del continente ... Parte de ese manto se extiende sobre el mar, formando vastas barreras de hielo, que constituyen más del 10% de la superficie del continente. Su espesor medio es de 250 metros, pero en algunas zonas el espesor alcanza los 1.300 metros. Las mayores barreras de hielo son las de Ross, Filchner, Ronne y Almerý. Las barreras se deslizan en dirección al mar a una velocidad de 900 a 1.300 metros por año.

La banquisa antártica se origina en el continente o su borde y posteriormente es empujada por los vientos mar adentro en dirección norte. Su superficie media oscila entre un mínimo de 2.6 millones de kilómetros cuadrados en marzo y unos 18.8 millones de kilómetros cuadrados en septiembre, una variación anual de la extensión mucho mayor de la que se produce en la banquisa ártica. En invierno, la banquisa rodea por completo a la Antártida y puede extenderse hacia el norte hasta los 55° de latitud Sur. Los témpanos de hielo tienen unas dimensiones horizontales de 10 a 100 metros y pueden alcanzar 3 metros de espesor, aunque la mayoría son 'hielo del primer año' con un espesor medio de 1'5 metros.

Los icebergs de la Antártida, denominados témpanos de hielo tabular, son por lo general más numerosos y notablemente mayores que los del Artico. Se han observado algunos con dimensiones horizontales de más de 60 por 100 kilómetros, y pueden alcanzar en su dimensión vertical 100 metros por encima del nivel del mar y de 400 a 500 por debajo de él. Esos icebergs se desprenden de la parte frontal de la barrera de hielo y se desplazan a una velocidad de unas 10 millas marinas por día, impulsados por las corrientes oceánicas; se los encuentra en puntos tan septentrionales como los 45° de latitud Sur en el Océano Pacífico y los 35° de latitud Sur en los Océanos Atlántico e Índico" (37).

El problema del status de los hielos marítimos surge por la diversa consideración jurídica del agua, según esté helada o no, dado que los hielos pueden tener una utilización más próxima a la terrestre que a la marítima. Mientras que en el Océano Artico ésta es una cuestión doctrinal abierta (38), en el Océano Austral conviene distinguir, desde el punto de vista jurídico, entre las tres siguientes clases de hielos: las barreras o plataformas de hielo, que son inmóviles y forman una unidad con la masa terrestre, a la que están unidas; los hielos flotantes, compuestos por fragmentos de hielo que se separan de los anteriores y que van a la deriva; y la banquisa de hielo, resultante de la congelación del agua del mar y flotante sobre la misma (39). En principio, no ofrece grandes dificultades considerar a los hielos permanentes como asimilables a la tierra firme y a los hielos estacionales o a la deriva como asimilables al mar (40).

Dado que en 1959 no se conocía con total exactitud dónde terminaba la Antártida y dónde comenzaba el mar, helado o no, el término "región" fue preferido al más específico de "tierra y mares" (41), toda vez que mediante una referencia expresa la "región" comprendida al sur de los 60° de latitud sur incluía también todas las barreras de hielo. En definitiva, existe, pues, un acuerdo de que el término Antártida, utilizado en el resto del articu-



lado de este Tratado, debe entenderse como la región situada al sur de los 60° S., incluidas todas las barreras de hielo. Ello abarca como mínimo al continente antártico propiamente dicho, a las islas situadas al sur de dicho paralelo (42) y a todas las barreras de hielo en él incluidas. Está claro que excluye a los hielos flotantes o a la deriva, así como a las islas subantárticas situadas al norte de los 60° S. (43). Lo que es bastante más dudoso, por el inciso final de dicho artículo, es si hay que considerar incluidos o no los mares existentes al sur de los 60° S. Incluso se duda cuál es el status de las aguas subyacentes a las barreras de hielo, dada la enorme extensión de algunas de ellas (44).

La expresión “nada en el presente Tratado perjudicará o afectará en modo alguno los derechos o el ejercicio de los derechos de cualquier Estado conforme al Derecho Internacional en lo relativo a la alta mar dentro de esa región”, ha sido fuente continua de problemas para los Estados Partes en el Tratado de la Antártida, provocando la división de opiniones sobre si este espacio marítimo del Océano Austral está o no comprendido en la región antártica. Este interrogante, y sus repercusiones jurídicas para el principio de la utilización exclusivamente pacífica de la Antártida, es objeto de comentario en el siguiente epígrafe.

## **2. La exclusión del Océano Austral del ámbito geográfico de aplicación del Tratado de la Antártida.**

A los efectos del presente trabajo, el principal interrogante que suscita la definición del ámbito geográfico de aplicación del Tratado de la Antártida, es el de determinar si el Océano Austral está incluido o no dentro de la región antártica.

Una primera interpretación surge a partir del concepto de alta mar recogido en la Convención de Ginebra de 1958 sobre la alta mar (45). Dada la controversia existente en dicha época acerca de si la anchura del mar territorial era de tres o seis millas, el art. VI no se pronunció sobre qué constituía la alta mar antártica (46). No obstante, dado que la posible franja de agua que en todo caso constituiría el mar territorial estaba permanentemente helada y, por lo tanto, formaría parte de las barreras de hielo expresamente mencionadas en el artículo VI (47), los mares situados al sur de los 60° S. serían todos alta mar y estarían excluidos del ámbito de aplicación del Tratado de la Antártida. Conclusión que se ve reforzada por el hecho de que la definición del área de aplicación del Tratado de la Antártida menciona expresamente a las barreras de hielo, lo que indica que, sin esa referencia expresa, no estarían comprendidas en la “región” antártica (48).

Así, al excluir la alta mar del ámbito de aplicación del Tratado de la Antártida (49), la consecuencia del art. VI es crear dos regímenes jurídicos distintos existentes al sur de los 60° S. (50). Uno, aplicable en la región situada al sur de dicho paralelo, incluyendo las barreras de hielo, en el que, en virtud del Tratado de la Antártida, estarían prohibidas todas las actividades de carácter militar, como la realización de maniobras militares o los ensayos de cualquier tipo de armas (art. I), así como toda explosión nuclear o la eliminación de desechos radioactivos (art. V). El otro régimen sería el de la alta mar, donde estas actividades estarían reguladas por el régimen de libertad, de tal forma que, la realización de ma-

niobras navales, aunque no fuera con fines pacíficos, no contravendría el art. I del Tratado de la Antártida. Además, la realización de ensayos nucleares, en el supuesto discutible de que constituya una libertad de la alta mar, no estaría prohibida en el Océano Austral, salvo para los Estados signatarios del Tratado de prohibición de pruebas con armas nucleares en la atmósfera, en el espacio ultraterrestre y bajo el agua (51), y tampoco estaría prohibido el supuesto aún más controvertido del vertimiento de desechos radioactivos (52), aunque el único Estado que ha tenido un reactor nuclear en la Antártida, los Estados Unidos, decidiera no verterlos en esta zona y embarcarlos de vuelta a casa (53).

Frente a esta interpretación, ha emergido otra distinta, respaldada por los Estados Partes Consultivos en el Tratado de la Antártida. Estos Estados afirman que dicho Convenio se aplica globalmente a toda la región situada al sur de los 60º de latitud sur. Por lo tanto, queda comprendida no sólo el continente antártico y las islas y las barreras de hielo, sino también los mares allí existentes (54). En este sentido, insisten en que el art. VI, al afirmar que el Tratado de la Antártida se aplica a la "región" situada al sur de los 60º S., "incluidas todas las barreras de hielo", parece excluir las zonas marítimas, pues éstas no son mencionadas expresamente. Sin embargo, la segunda parte de dicho artículo, al reservar el ejercicio de los derechos reconocidos a cualquier Estado por el Derecho Internacional en lo relativo "a la alta mar" que se encuentra "dentro de esa región", las incluye formalmente, dado que sobre las mismas no existe reserva alguna en esta disposición (55). A mayor abundancia, se señala que no habría necesidad de reservar los derechos de la alta mar si el Tratado de la Antártida no se aplicara a los mares circundantes (56).

Las consecuencias de esta segunda tesis son claras: las disposiciones del Tratado de la Antártida se aplican a todas las zonas, terrestres o marítimas, existentes al sur del paralelo 60º S. Sin embargo, los problemas se suscitan por la intersección de las disposiciones de dicho Tratado con las libertades de la alta mar. Para los autores más radicales, lo que el Tratado de la Antártida reconoce es los derechos o el ejercicio de derechos relativos a la alta mar en la forma y medida que hasta ese momento autorizaban la costumbre o los tratados en vigor, pero, y en ello insisten, con las limitaciones inpuestas por el Tratado de la Antártida (57). Actitud expresamente asumida por alguna de las Partes Consultivas en el Tratado de la Antártida, y así, por ejemplo, el representante de la Delegación de la desaparecida R.D. Alemana ante la Asamblea General de la O.N.U. afirmó lo siguiente:

"Todo este sexto continente y sus islas y mares adyacentes están desmilitarizados y se encuentran libres de todo tipo de armamentos, incluyendo las armas nucleares y otras armas de destrucción en masa, y se prohíbe allí toda actividad de carácter militar, incluyendo los ensayos de armamentos. En esta región, todos los Estados y cada uno de ellos pueden enviar equipos de inspección en cualquier momento para observar las actividades que lleva a cabo otro Estado en cualquier parte de la Antártida" (58).

Los autores más moderados, por su parte, no pueden dejar de reconocer que esta tesis:

"... plantea algunos interrogantes acerca de la aplicación, entre otras, de las cláusulas que limitan o condicionan las libertades de la alta mar, incluyendo las

de Estados que no son partes en el Tratado de la Antártida, como la utilización exclusiva para fines pacíficos (no militarización) del artículo I, la prohibición de realizar explosiones nucleares y de eliminar desechos radioactivos del artículo V, y el derecho de inspección que establece el artículo VII" (59).

Interrogantes más que justificados, toda vez que un Tratado celebrado entre un reducido número de Estados no puede limitar ni restringir los derechos que el ordenamiento internacional reconoce al resto de la comunidad internacional en la alta mar (60). Máxime si se tiene en cuenta que en el Tratado en cuestión se establece que: "nada en el presente Tratado perjudicará o afectará en modo alguno los derechos o el ejercicio de los derechos de cualquier Estado conforme al Derecho Internacional en lo relativo a la alta mar dentro de esa región".

Frente a esta discrepancia de opiniones, no está de más acudir a las reglas de interpretación de los tratados reguladas en el Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados (art.s 31º y ss.), y en concreto, a los trabajos preparatorios del Tratado de 1959, así como a la práctica ulteriormente seguida por los Estados Partes.

Por lo que se refiere a los trabajos preparatorios del Tratado de la Antártida, se ha de señalar que tanto las reuniones preparatorias de la Conferencia de Washington de 1959, como la propia Conferencia, se celebraron a puerta cerrada, guardándose el secreto de las deliberaciones (61). No obstante, sólo recientemente dos autores (62) que participaron en la misma, se han referido a las vicisitudes de la elaboración del artículo VI. El documento de base que se presentó para la negociación de este artículo definía el ámbito de aplicación del Tratado simplemente como la región al sur del paralelo 60º con la excepción de la alta mar. La delegación argentina (documento COM/I, p. 6), apoyada por la Unión Soviética, presentó una propuesta por la que se extendían los grandes principios del Tratado de la Antártida (la no militarización y su control, la prohibición de proceder a ensayos de armas, la no solución del problema de la soberanía antártica, la libertad de investigación científica y el acceso de todos a sus resultados) al área geográfica más amplia posible, de forma que se incluyera expresamente a la alta mar antártica. No se pretendía incorporar de esta forma el problema de la explotación económica, ni forzosamente el de la jurisdicción marítima. Sin embargo, esta propuesta se encontró con la oposición expresa del Reino Unido (documento COM/I, p. 13) apoyada por las delegaciones del Japón, Bélgica y los Estados Unidos, las cuales prefirieron excluir la alta mar del ámbito de aplicación del futuro tratado, con la excepción de las barreras de hielo que, sin ser tierra firme, constituyeran un todo con el continente antártico. Frente a estas dos posturas, la Unión Soviética y Chile sugirieron finalmente una fórmula de compromiso, recogida en el actual artículo VI, por la que el Tratado se aplicaría al sur de los 60º S., sin afectar a los derechos reconocidos a todos los Estados en la alta mar.

De lo anterior, se derivan dos consecuencias claras. En primer lugar, el Tratado de la Antártida no se aplica sin más a la alta mar existente al sur del paralelo 60º S. Prueba de ello es que la propuesta argentino-soviética no prosperó. En segundo lugar, como resultado de la fórmula de compromiso alcanzada, las disposiciones de dicho convenio únicamente son aplicables en la alta mar en la medida en que no afecten de ninguna ma-

nera a las libertades que todos los Estados, sean o no partes en dicho convenio, gozan en la alta mar.

Por lo que se refiere a la práctica ulteriormente seguida por los Estados Partes en el Tratado de la Antártida, la misma es igualmente válida para concluir afirmando la no aplicación del Tratado en cuestión a la alta mar existente en el Océano Austral. Así, los Estados Partes no han encontrado ningún inconveniente en que las diversas actividades humanas realizadas en tierra firme o en las barreras de hielo sean reguladas por las disposiciones del Tratado de la Antártida y por las recomendaciones adoptadas en virtud de su artículo IX. Sin embargo, para los asuntos marítimos del Océano Austral, estos mismos Estados han afirmado igualmente su competencia normativa, con la finalidad principal de evitar la interferencia externa en temas relacionados con los recursos marítimos (63), aunque utilizando una vía jurídica distinta: las actividades marítimas al sur de los 60º S. las regulan por Tratados internacionales formalmente separados del Tratado de la Antártida, aunque vinculados materialmente con el mismo (64). Tratados internacionales que son celebrados únicamente por los Estados Partes en el Tratado de la Antártida.

Esta práctica es fundamental para concretar el alcance y contenido del artículo VI. En definitiva, indica que el Tratado de la Antártida no autoriza a los Estados Partes a regular, vía recomendaciones, los asuntos marítimos al sur de los 60º S. Si la posible competencia de dichos Estados sobre estas zonas la encuentran en instrumentos jurídicos distintos, es porque las disposiciones del Tratado de la Antártida, incluido el principio de utilización pacífica en él regulado, no se aplican a los mares al sur de dicho paralelo.

### **3. La utilización exclusivamente pacífica de la alta mar en el Océano Austral.**

Estando el Océano Austral excluido del ámbito de aplicación del Tratado de la Antártida, es obvio que el régimen de utilización de esta amplia región marítima estará condicionado por el régimen jurídico propio de la alta mar. Debe comenzarse por recordar que el Convenio de Ginebra de 29 de abril de 1958 sobre la alta mar, no contiene ninguna disposición por la que la alta mar deba ser utilizada exclusivamente con fines pacíficos. Sin embargo, de esta ausencia de previsión legal no se deduce necesariamente que los Estados fueran completamente libres para realizar cualquier actividad en los vastos espacios marinos no sometidos a la soberanía de ningún Estado. Junto a normas internacionales generales, como el mandato de abstenerse “de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas” (65), vigente también en este espacio marino, el propio Convenio ginebrino limitó igualmente esta libertad de acción de los Estados. Así, tras enumerar en su art. 2 la lista de libertades de la alta mar, el último párrafo de este artículo concluye afirmando que:

“Estas libertades, y otras reconocidas por los principios generales del derecho internacional, serán ejercidas por todos los Estados con la debida consideración para con los intereses de otros Estados en su ejercicio de la libertad de alta mar”.

Disposiciones que permiten afirmar que, aún en defecto de proclamación expresa, desde 1945 la alta mar ha debido utilizarse de modo exclusivamente pacífico.

Esta ausencia de proclamación expresa ha sido paliada con creces en el más reciente Convenio de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, adoptado en Bahía Montego el 10 de diciembre de 1982. Así, con carácter general para todos los espacios marítimos, incluida la alta mar, el art. 301 impone el deber de utilización del mar con fines pacíficos (66). Incluso la historia legislativa de este precepto muestra con claridad qué es lo que debe entenderse con la fórmula "utilización del mar con fines pacíficos" (67). Los orígenes de esta fórmula se remontan a 1976, cuando algunos países del tercer mundo interpretaron que con la misma se prohibía toda utilización militar de los océanos (68). Sin embargo, la versión definitiva del mismo recogió la tesis de las grandes potencias marítimas, que insistieron en que con tal fórmula sólo se prohibían únicamente las actividades militares contrarias a la Carta de las Naciones Unidas (69). En consecuencia, el art. 301 de este Convenio no supone ninguna novedad respecto del art. 2-4 de la Carta de las Naciones Unidas (70), del cual ya hemos dicho además que prevalece en caso de conflicto con obligaciones impuestas por otro tratado internacional.

De forma mucho más específica, el art. 88 del Convenio de 1982, titulado "Utilización exclusiva de la alta mar con fines pacíficos", dispone que: "La alta mar será utilizada exclusivamente con fines pacíficos". Proclamación expresa de este principio en la alta mar que, de forma muy evidente, no ha visto concretado su significado en el texto del Convenio de 1982.

Es precisamente al intentar concretar el contenido del principio de la utilización exclusivamente pacífica de la alta mar, cuando más ostensibles se hacen las diferencias en la aplicación de este principio al continente antártico y al Océano Austral. Así, en primer lugar, las libertades de navegación y sobrevuelo de este espacio marítimo (art. 87-1 del Convenio de 1982), que se encuentran entre las más importantes libertades de la alta mar, se ha reconocido consuetudinariamente desde siempre que también las disfrutaban los buques de guerra (71), con el límite de la debida consideración hacia los intereses de los demás Estados (art. 2 del Convenio de 1958, art. 87-2 del Convenio de 1982). En este sentido, la realización de maniobras militares en la alta mar, aunque temporalmente determinen el cierre de una parte de la misma a la navegación internacional, jamás se ha considerado en contradicción con el debido respeto al ejercicio de las libertades de la alta mar por los restantes Estados (72). Incluso recientemente ha aparecido una abundante práctica convencional de tipo bilateral destinada a asegurar que las maniobras militares realizadas en la alta mar no perjudiquen las libertades de terceros Estados en este espacio marino (73).

En segundo lugar, nada en el Convenio de 1982 prohíbe la realización en alta mar de otras actividades militares distintas de las maniobras navales (74), tales como el ensayo de nuevas armas o la realización de ensayos nucleares. Tales actividades están igualmente sometidas al límite genérico de respetar el ejercicio de las libertades de la alta mar por terceros Estados (75). Sin embargo, debe recordarse que el espinoso tema de la realización de ensayos nucleares en la alta mar fue discutido ya en la Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, sin que ninguna delegación llegara en 1958 hasta el extremo de forzar la votación de propuesta alguna sobre este particular, por lo que de la

codificación del derecho del mar no se puede afirmar con rotundidad que los mismos estén prohibidos. No obstante, el tema de los ensayos nucleares fue retomado posteriormente, al adoptarse el Tratado de prohibición de pruebas con armas nucleares en la atmósfera, en el espacio ultraterrestre y bajo el agua (Moscú, 5-VIII-1963) (76). En su art. 1º, los Estados partes se comprometen a prohibir, impedir y no realizar explosiones con armas nucleares ni cualquiera otra clase de explosión nuclear en ningún lugar situado bajo su jurisdicción y control: a) en la atmósfera, fuera de sus límites, incluido el espacio ultraterrestre y bajo el agua, comprendidas las aguas territoriales o el mar territorial; y b) en cualquier otro medio físico cuando la explosión origine la presencia de residuos radioactivos fuera de los límites territoriales del Estado bajo cuya jurisdicción o control aquélla se efectuare. Aunque este Tratado ha tenido una gran aceptación, dos grandes potencias nucleares como Francia y la República Popular China se han negado hasta la fecha a ser partes en el mismo. Para estos Estados, en consecuencia, no existe prohibición convencional de realizar ensayos nucleares en la alta mar (77), aunque siga siendo bastante dudoso consuetudinariamente que con tales actividades se tengan debidamente en cuenta los intereses del resto de los Estados en su disfrute de las libertades de la alta mar.

Finalmente, por lo que se refiere al vertimiento de desechos radioactivos en la alta mar, ya el Convenio de Ginebra de 1958 contenía una disposición expresa, aunque con una redacción un tanto vaga, sobre este particular (78). Más recientemente, el Convenio de 1982, de acuerdo con la orientación posibilista del Derecho internacional del medio ambiente, no contiene una prohibición expresa y radical de los vertimientos marinos, sino que persigue establecer un sistema de regulación y control de los mismos. Así, tras establecer en su art. 1 una amplia definición del término contaminación, en su art. 210 se limita a establecer que los Estados dictarán leyes y reglamentos para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino por vertimiento. En consecuencia, a pesar de la ausencia de una norma expresa que prohíba el vertido de desechos radioactivos en el mar (79), el Derecho del Mar sí que condena en todo caso los vertidos marinos de naturaleza contaminante (80). Por lo que se refiere más concretamente al vertimiento de desechos radioactivos en la alta mar, parece obvio que el deber de respetar el ejercicio de las libertades de la alta mar por parte de terceros Estados impone ciertos límites a estas operaciones de vertimiento (81). Límites que en buena parte han sido concretados por el Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias (Londres, México D. F., Moscú y Washington, 29-XII-1972) (82). Según este Convenio, no toda operación de vertimiento de desechos radioactivos en el mar está prohibida, sino que se ha seguido un sistema de listas (art. 4 y Anexos I y II) en cuya virtud está totalmente prohibido el vertimiento de desechos y otras materias de alto nivel radioactivo, definidos por el Organismo Internacional de Energía Atómica como inapropiados para ser vertidos en el mar; requiriéndose un permiso especial para el vertimiento de los restantes desechos o materias radioactivas. Como consecuencia de la creciente oposición a estas actividades, la VII Reunión Consultiva de las Partes del Convenio de Londres adoptó el 18-II-1983 una moratoria por la que se prohíbe toda operación de vertimiento de sustancias radioactivas (83).

#### IV. CONCLUSIONES.

La utilización pacífica de la Antártida ha resultado uno de los logros más sobresalientes del Tratado de Washington de 1959. Este ha sido el primer convenio adoptado después de la II Guerra Mundial, en el que por primera vez se ha afectado una región a una utilización exclusivamente pacífica, declarándola como zona no militarizada y no nuclearizada, con un sistema de inspección unilateral, aceptado igualmente por primera vez por las grandes potencias. Incluso las delegaciones de los Estados no partes en el Tratado de la Antártida que, desde 1983, han perseguido en la Organización de las Naciones Unidas la revisión o sustitución de este Tratado, han insistido reiteradamente en que la Antártida debe seguir utilizándose exclusivamente para fines pacíficos, así como que debe seguir siendo una zona no militarizada y no nuclearizada (84). De ahí que recientemente el Protocolo al Tratado de la Antártida sobre protección del medio ambiente (Madrid, 4 de octubre de 1991) haya confirmado la vigencia de este principio, al designar a la Antártida, en su art. 2, "como reserva natural, consagrada a la paz y a la ciencia".

Por todo ello, no ha resultado extraño que la influencia del Tratado de la Antártida se hiciera sentir especialmente en la regulación convencional posterior de otros espacios comunes, que con mayor o menor fortuna han regulado igualmente el principio de la utilización exclusivamente pacífica de los mismos. Tal es el caso, por ejemplo, del espacio ultraterrestre, de la alta mar y de la zona internacional de fondos marinos y oceánicos (85).

Pero incluso la fórmula de la utilización exclusivamente pacífica, regulada por primera vez en el Tratado de la Antártida, ha desbordado ya el ámbito geográfico de los espacios comunes y está comenzando a aparecer regulada convencionalmente en amplias regiones de nuestro planeta que se encuentran bajo la soberanía estatal. De ahí que se considere al Tratado de la Antártida como el primer antecedente de los diversos convenios posteriores sobre no militarización y no nuclearización (86). Plasmaciones parciales de este principio de utilización exclusivamente pacífica se encuentran, por ejemplo, en los tratados que instituyen zonas regionales militarmente desnuclearizadas en aplicación del art. VII del Tratado de no proliferación de armas nucleares, tales como el art. I del Tratado para la proscripción de las armas nucleares en la América Latina (México, D. F., 14 de febrero de 1967), conocido como el Tratado de Tlatelolco (87) o como el más reciente art. 4 del Tratado sobre la zona desnuclearizada del Pacífico Sur (Rarotonga, 6 de agosto de 1985) (88).

Estas influencias posteriores no han podido, en todos los casos, regular el alcance y contenido de este principio con la misma intensidad con la que lo realizó el Tratado de la Antártida. Por ello, los mares circundantes a este continente, al no estar incluidos en su ámbito geográfico de aplicación, han recibido la influencia de este principio mediante su proclamación en el Convenio de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar para la alta mar, con la paradoja de que su contenido ha sido pasado por agua, implicando tan sólo una desmilitarización y una desnuclearización de alcance parcial.

Valencia, enero de 1993.

## NOTAS

- (1) Como por ejemplo en la Antártida, pues con anterioridad a la celebración del Tratado de la Antártida (Washington, 1 de diciembre de 1959, publicado en el B.O.E. de 26 de junio de 1982), siete Estados (Argentina, Australia, Chile, Francia, Noruega, Nueva Zelanda y Reino Unido) habían reclamado soberanía sobre partes del continente austral, entre el período de tiempo que media entre 1907 y 1940. Debe señalarse que tales pretensiones no fueron reconocidas por ningún otro Estado y que, de hecho, las dos superpotencias de la época hicieron públicos sus propios fundamentos para reclamar su soberanía sobre partes o todo el continente antártico. Sobre el tema de la soberanía antártica existe una abundante bibliografía. A este respecto, vide BOU FRANCH, V. (1990), *Régimen jurídico de la Antártida: sus relaciones con las zonas marítimas del Océano Austral*, Valencia, Tesis Doctoral, pp. 134-147, y la abundante bibliografía allí citada.
- (2) Como, por ejemplo, el espacio ultraterrestre, la zona internacional de fondos marinos y oceánicos o la alta mar.
- (3) El texto de este Tratado, contenido en la Resolución 2.222 (XXI), de 19 de diciembre de 1966, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ha sido publicado en el B.O.E. de 4 de febrero de 1969. Una aplicación concreta de esta disposición se encuentra en el art. 11.-2 del Acuerdo que debe regir las actividades de los Estados en la Luna y otros cuerpos celestes (Nueva York, 18 de diciembre de 1979). El texto de este Acuerdo se contiene en la Resolución 34/68, de 5 de diciembre de 1979, de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
- (4) Publicado en el B.O.E. de 27 de diciembre de 1971. Una actualización de esta disposición se encuentra en el artículo 89 del Convenio de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar (Bahía Montego, 10 de diciembre de 1982). El texto de este Convenio, que todavía no ha entrado en vigor y no ha sido ratificado por el Estado español, puede consultarse en JUSTE RUIZ, J. (ed.) (1991), *Derecho Internacional Público. Textos básicos*, Valencia, pp. 235 y ss.
- (5) Según esta propuesta, los siete Estados reclamantes de soberanía antártica, más los Estados Unidos, se comprometerían a evitar cualquier conflicto en la Antártida. Sobre la Declaración de Escudero, vide GAJARDO VILLAROEL, E. (1977), Apuntes para un libro sobre la historia diplomática del Tratado Antártico y la participación chilena en su elaboración, *Revista de difusión INACH*, 10, pp. 46 y ss. Una versión más elaborada de la propuesta de Escudero, se encuentra reproducida en BUSH, G. (1982), *Antarctica and International Law. A Collection of Inter-State and National Documents*, vol. 2, Londres, Oceana Publications Inc, p. 384.
- (6) Según la Declaración tripartita: "Deseos de evitar cualquier malentendido en la Antártida que pudiera afectar a las amistosas relaciones entre el Reino Unido, la Argentina y Chile, los Gobiernos de los tres países se han comunicado mutuamente que, en las actuales circunstancias, no prevén la necesidad de enviar barcos de guerra al sur de los 60° de latitud Sur durante la temporada antártica 1948-1949, con excepción naturalmente, de los movimientos que han sido habituales durante algunos años". Reproducida en: N.U. Doc. A/39/583 (Part I). Cuestión de la Antártida. Estudio solicitado en la Resolución 38/77 de la Asamblea General. Informe del Secretario General, 31 de octubre de 1984, p. 19, párr. 40. Traducida del inglés de: WHITE-MAN (1963), *Digest of International Law*, vol. 2, Washington, D.C., Department of State Publication, p. 1238.



- (7) Vide N.U. Doc. nº A/3.118/Add. 1 y 2, y N.U. Doc. A/3852, respectivamente.
- (8) Cfr. HANSARD, Parliamentary Debates, House of Commons, Oral Answers to Questions, February 18, 1958, vol. 582, cols. 1033-1034. Vide igualmente la respuesta del Ministro chileno de Asuntos Exteriores, Sr. Alberto Sepúlveda Contreras, de 18 de febrero, reproducida en HAYTON, R. D. (1958), *Polar Problems and International Law*, *American Journal of International Law*, 52/4, pp. 755-756.
- (9) El 3 de mayo de 1958, el Presidente Eisenhower anunció que había invitado a otros once Estados a negociar un acuerdo sobre la Antártida de la siguiente manera: "Los Estados Unidos defienden el principio de que las vastas tierras inhabitadas de la Antártida deben utilizarse únicamente para fines pacíficos. No queremos que la Antártida se convierta en un objeto de conflicto político. En consecuencia, los Estados Unidos han invitado a otros 11 países, incluida la Unión Soviética, a celebrar una conferencia con nosotros para tratar de buscar conjuntamente un medio eficaz con el fin de alcanzar ese objetivo". Reproducido en: N.U. Doc. A/39/583 (Part II), vol. 3, p. 132, párr. 91. Cuestión de la Antártida. Estudio solicitado en la Resolución 38/77 de la Asamblea General. Observaciones de los Estados Unidos al Informe del Secretario General. Vide COLSON, D. A. (1986), *The United States position on Antarctica (Symposium: The International Legal Regime for Antarctica)*, *Cornell International Law Journal*, 19, pp. 294-295.
- (10) Cfr. FREELAND, J. R. (1960), *The Antarctic Treaty*. En: Report of International Law Conference held at Niblett Hall, July 1960, London, *The David Davies Memorial Institute of International Studies*, p. 24; SINGH BHADARIA, Y. (1983), *The Antarctic Treaty and its legal implications*, *Indian Journal of International Law*, 23, p. 578.
- (11) Vide, inter alia, HANESSIAN, J. (1960), *The Antarctic Treaty 1959*, *International and Comparative Law Quarterly*, 1960, p. 468; HAYTON, R. D. (1960), *The Antarctic Settlement of 1959*, *American Journal of International Law*, 54, p. 358; TAUBENFELD, H. J. (1961), *A Treaty for Antarctica*, *International Conciliation*, 531, p. 283, etc.
- (12) Incluso ha ocurrido que sean los propios militares los que realicen investigaciones científicas de tipo "pacífico". En marzo de 1982, el director del Servicio Antártico Británico visitó una base argentina en San Martín, e informó que "estaba habitada por 23 personas, todas ellas militares. Dos de ellos estaban realizando operaciones meteorológicas y no se realizaba ninguna otra actividad científica".
- (13) Conviene tener en cuenta que, con motivo de la firma del Tratado de la Antártida, Argentina, Chile y Estados Unidos formularon una declaración, de hecho una reserva, por la que ninguna de las disposiciones de este convenio afectaba a sus obligaciones emanantes del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, firmado en Río de Janeiro en 1947 (texto reproducido en WHITEMAN (1963), *Digest of International Law*, vol. 2, op. cit., p. 44). Además, Chile formuló la siguiente Declaración en relación con el art. I del Tratado de la Antártida: "el conjunto de disposiciones del referido artículo I en nada menoscaba el derecho de legítima defensa, individual y colectiva, consagrado explícitamente en la Carta de las Naciones Unidas" (reproducido en BUSH, M. W. (1982), *Antarctica and International Law. A Collection of Inter-State and National Documents*, op. cit., vol. 1, p. 32). En estas circunstancias, las medidas militares adoptadas en el ejercicio de la legítima defensa, individual o colectiva, no serían, según Chile, contradictorias con la utilización pacífica de la Antártida.

- (14) Vide sobre este particular ALMOND, H. H. (1985), *Desmilitarization and arms control: Antarctica*, *Case Western Reserve Journal of International Law*, 17, pp. 229-284; MONCAYO, G. R. (1987), L'utilisation de l'Antarctique à des fins pacifiques. En: Francioni, F.; Scovazzi, T. (ed.s), *International Law for Antarctica*, Milano, Giuffrè Ed., pp. 155-185.
- (15) Esta propuesta fue aceptada, pese a la oposición inicial de algunos Estados, como Nueva Zelanda, una vez se constató que todos los países, incluida la propia Nueva Zelanda, dependían de sus armadas para establecer bases científicas en la Antártida. Cfr. AUBURN, F. M. (1982), *Antarctic Law and Politics*, London, C. Hurst & Co. (Publishers) Ltd., p. 95. Sobre el alcance de esta excepción, vide FOX, H. (1987), The relevance of Antarctica to the lawyer. En: Triggs, G. D. (ed.), *The Antarctic Treaty regime: law, environment and resources*, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 80 y ss.
- (16) Cfr. la declaración de Lord Buxton en el Parlamento británico el 6 de diciembre de 1983, reproducida en BECK, P. J. (1986), *The International Politics of Antarctica*, London, Croom Helm Ltd., p. 72.
- (17) Vide, inter alia, ROBERTS, B. (1977), International Cooperation for Antarctic Development: the Test for the Antarctic Treaty. En: Orrego Vicuña, F.; Salinas Anaya, A. (ed.s), *El desarrollo de la Antártida*, Santiago de Chile, Ed. Universitaria, p. 337; OXMAN, B. H. (1978), The Antarctic Regime: An Introduction, *University of Miami Law Review*, 33, p. 287; KHLESTOV, O.; GOLITSYN, V. (1978), The Antarctica: arena of peaceful cooperation, *International Affairs-Moscow*, 8, p. 62.
- (18) MOUTON, M. W. (1962), The international regime of the polar regions, *Recueil des Cours. Académie de droit international*, 107, p. 236.
- (19) Cfr. BECK, P. J. (1984), *Antarctica since the Falklands conflict: the continent emerging role in international politics*, British International Studies Association Conference, University of Durham, December 1984; FUCHS, V. F. (1985), The Falkland Islands and Antarctica, *NATO's sixteen nations*, 30/4, pp. 26-30.
- (20) BARCELO, J. J. III (1986), The international legal regime for Antarctica (Symposium: The International Legal Regime for Antarctica), *Cornell International Law Journal*, 19, p. 157, no se sabe muy bien porqué, afirma que ninguna disposición del Tratado de la Antártida se refiere expresamente al objetivo de la no nuclearización.
- (21) VAN DER ESSEN, A. (1987), Origine et développement du système antarctique. En: Francioni, F.; Scovazzi, T. (ed.s), *International Law for Antarctica*, Milano, Giuffrè Ed., pp. 11-12; ANDRÉEV, E. (dir.) et al. (1988), Régimen jurídico internacional de la Antártida. En: *Derecho Internacional del Mar*, Moscú, Ed. Progreso, p. 151.
- (22) Textos reproducidos en BUSH, M. W. (1982), *Antarctica and International Law. A Collection of Inter-State and National Documents*, op. cit., vol. 1, p. 34. Véase igualmente CORTESE, G. (1971), La denuclearizzazione dell'Antartida, dello spazio extraatmosferico e del fondo marino, *Revue de droit international, de sciences diplomatiques et politiques*, 48, pp. 105-109.
- (23) En torno a estas fechas, las Partes Consultivas adoptaron varias recomendaciones sobre este particular. Se acordó el intercambio de información sobre la utilización de técnicas y equipos nucleares en el área del Tratado (Recomendación I-XIII). Se consideró especialmente la utilización de sustancias radio-isotópicas (Recomendación VI-5). Se exige la previa notificación

de su utilización (Recomendaciones VI-6 y VIII-6) y todo tipo de desechos conteniendo radio isótopos deben ser trasladados fuera del área del Tratado de la Antártida (Recomendación VIII-11). La posibilidad de que terceros Estados vertieran residuos nucleares en la Antártida fue discutida en la Octava Reunión Consultiva (Recomendación VIII-12), al realizar Australia una declaración oficial sobre este tema. Cfr. *HANDBOOK of the Antarctic Treaty System*, February 1987, 5th Edition, Polar Publications, Scott Polar Research Institute, Cambridge, Reino Unido, pp. 1.501 y 3.201 y ss. Recientemente, el art. 2 del Anexo III (eliminación y tratamiento de residuos) del Protocolo al Tratado de la Antártida sobre la protección del medio ambiente (Madrid, 4 de octubre de 1991), ha recordado la obligación, de quien los genere, de eliminar los residuos procedentes de materiales radioactivos mediante su remoción del área del Tratado de la Antártida.

- (24) Sobre la postura de los EE.UU., vide el texto reproducido en BUSH, M. W. (1982), *Antarctica and International Law. A Collection of Inter-State and National Documents*, op. cit., vol. 1, p. 34. Sobre la interpretación doctrinal, vide, por ejemplo, FREELAND, J. R. (1960), *The Antarctic Treaty*, op. cit., p. 24; HANESEIAN, J. (1960), *The Antarctic Treaty*, 1959, op. cit., p. 471; HAYTON, R. D. (1960), *The Antarctic Settlement of 1959*, op. cit., p. 359; SIMMONDS, K. R. (1960), *The Antarctic Treaty, 1959/Le Traité sur l'Antarctique de 1959*, *Journal du Droit International*, 1960, p. 680; etc.
- (25) Vide HAJOST, S. A. (1988), *International Agreements Applicable to Antarctica: A Survey*. En: Wolfrum, R. (ed.), *Antarctic challenge III: conflicting interests, cooperation, environmental protection, economic development*, Berlín, Duncker & Humblot, pp. 93-95.
- (26) Pese a que, como se consideró en su tiempo, las condiciones de la Antártida, no habitada y alejada de los centros habitados, la configuran como el lugar idóneo para realizar ensayos nucleares de todo tipo y para vertir en ella toda clase de residuos radioactivos. Cfr. *Hearings on the Antarctic Treaty before the Committee on Foreign Relations. United States Senate, eighty-sixth cong., 2nd sess., 14 jun. 1960*, p. 40; *United Kingdom, Lords, Parliamentary Debates, series 5, vol. 221, sess. 1959-1960*, col. 165.
- (27) Apenas una semana antes de que el Presidente Eisenhower anunciara sus propuestas sobre la Antártida, un proyecto de resolución (N.U. Doc. S/3.995) presentado ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por los Estados Unidos el 28 de abril de 1958, en el que se solicitaba la negociación de un sistema de inspección libre en el Artico, fue vetado por la Unión Soviética. Según SIMSARIAN, J. (1966), *Inspection Experience under the Antarctic Treaty and the International Atomic Energy Agency*, *American Journal of International Law*, 60, p. 509, el copresidente de la delegación soviética en la Conferencia de Washington, Sr. G. I. Tunkin, afirmó que la Unión Soviética aceptaba la inspección libre de la Antártida porque "dichas inspecciones no podían ser usadas contra la seguridad nacional".
- (28) En la práctica, las inspecciones antárticas siempre han sido unilaterales y, por la dureza climatológica del medio antártico, se ha desarrollado la costumbre de dar el preaviso a la base antártica objeto de la inspección, pese a que este requisito no esté exigido en el Tratado de la Antártida. Los Estados Unidos han sido el país que, con mucho, más inspecciones ha realizado. Australia, Francia, Reino Unido, Argentina, ... ocasionalmente han realizado alguna inspección antártica. La Unión Soviética, nunca. Vide, además del trabajo de SIMSARIAN citado en la nota anterior, HANEVOLD, T. (1971), *Inspections in Antarctic, Cooperation and Conflict*, 2,

- pp. 103-114; VOELCKEL, M. (1976), L'inspection en Antarctique. En: Fischer, G.; Vignes, D. (ed.s), *L'inspection internationale*, Bruxelles, Bruylant, pp. 223-246.
- (29) Cfr. BOSCO, G. (1987), Settlement of Disputes under the Antarctic Treaty. En: Francioni, F.; Scovazzi, T. (ed.s), *International Law for Antarctica*, Milano, Giuffrè Ed., pp. 23-26.
- (30) La postura de la Unión Soviética se encuadra en su tradicional oposición a no reconocer en ningún caso como obligatoria la jurisdicción del Tribunal Internacional de Justicia. La actitud de Chile y Argentina se comprende mejor si se recuerda que, ya en agosto de 1955, se negaron expresamente a reconocer la competencia del Tribunal de La Haya para entrar a conocer y juzgar la demanda presentada el 4 de mayo de 1955 por el Reino Unido sobre la cuestión de la soberanía antártica. Vide I.C.J. Pleadings, Antarctica Cases: (United Kingdom v. Argentina; United Kingdom v. Chile).
- (31) Sobre los numerosos problemas teóricos que plantea esta disposición convencional frente a los terceros Estados, vide SIMMA, B. (1986), The Antarctic Treaty as a treaty providing for an "objective" regime (Symposium: The International Legal Regime for Antarctica), *Cornell International Law Journal*, 19, pp. 189-209; *ibid.*, (1987), Le Traité antarctique: crée-t-il un régime objectif ou non? En: Francioni, F.; Scovazzi, T. (ed.s), *International Law for Antarctica*, Milano, Giuffrè Ed., pp. 137-153; BRUNNER, S. (1987), Article 10 of the Antarctic Treaty revisited. En: *ibid.*, pp. 27-51.
- (32) El Océano Austral ha sido definido de la siguiente forma: "El Océano Antártico (o Austral) es el único gran océano no interrumpido de este a oeste por masas de tierras continentales. Su frontera meridional es la propia Antártida, cuyo manto de hielo se extiende totalmente, salvo en contados puntos, hasta el borde del agua. En determinadas zonas, ese manto de hielo cubre extensiones que con un clima más cálido podrían ser bahías profundas o mares parecidos al Mediterráneo. En su frontera septentrional, el Océano Antártico está en comunicación abierta con los tres sistemas oceánicos principales de las regiones templadas y tropicales". Cfr. N.U. Doc. A/39/583 Informe del Secretario General (Part I), p. 89, párr. 349. "Se considera que el Océano Austral es la prolongación meridional de los Océanos Atlántico, Indico y Pacífico. Se considera que su frontera septentrional es la Convergencia Antártica, situada generalmente entre los 45º y los 60º de latitud sur". N.U. Doc. A/41/722 Informe del Secretario General, p. 29, párr. 113. La denominación Océano Austral ya ha sido aceptada por la comunidad internacional, p. ej. en la Resolución 40/156 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sobre el mismo, vide BOU, V. (1989), La conservación de los recursos vivos marinos antárticos en la Convención de cambera de 1980. En: *Estudios en recuerdo de la profesora Sylvia Romeu Alfaro*, Valencia, pp. 155-168.
- (33) HANESSIAN, J. (1960), The Antarctic Treaty, 1959, op. cit., pp. 471-472; BECK, P. J. (1986), *The International Politics of Antarctica*, op. cit., pp. 67-68.
- (34) Cfr. THEUTENBERG, B. J. (1984), *The Evolution of the Law of the Sea with Special Regard to the Polar Areas: A Study Concerning Resources and Strategy*, Dublin, Tycooly Int. Pub. Ltd., p. 67.
- (35) HANESSIAN, J. (1960), The Antarctic Treaty, 1959, op. cit., p. 472. Más recientemente, SINGH BHADARIA, Y. (1983), The Antarctic Treaty and its legal implications, *Indian Journal of International Law*, 23, p. 581.
- (36) HAYTON, R. D. (1960), The Antarctic Settlement of 1959, op. cit., pp. 359-360; TAUBENFELD, H. (1961), A Treaty for Antarctica, op. cit., pp. 285-286.

- (37) Informe del Secretario General ... N.U. Doc. A/39/583 (Part I), op. cit., pp. 10-11, párs 4-6.
- (38) PHARAND, D. (1979), The Legal Status of the Arctic Regions, *Recueil des Cours. Académie de droit international*, 1979/2, p. 84, afirma que: "Except for the presence of ice floes on top of its waters, the Arctic Ocean is like any other ocean ... the waters of the Arctic Ocean must be considered as high seas, as in any other ocean". Opinión contraria sostiene, por ejemplo, MANGONE, G. J. (1988), The Legal Status of Ice in International Law. En: Wolfrum, R. (ed.), *Antarctic challenge III: conflicting interests, cooperation, environmental protection, economic development*, Berlín, Duncker & Humblot, p. 388. Sobre el Artico, vide DOLLOT, R.-J. (1949), Le Droit International des spaces polaires, *Recueil des Cours. Académie de droit international*, 75, pp. 121-200; MOUTON, M. W. (1962), The international regime of the polar regions, op. cit., pp. 169-284; BOYD, S. B. (1984), The Legal Status of the Arctic Sea Ice: A Comparative Study and a Proposal, *Canadian Yearbook of International Law*, 1984, pp. 98-151; MOLDE, J. (1982), The Status of Ice in International Law, *Nordisk Tidsskrift for International Ret*, 1982, pp. 164-178, etc.
- (39) Cfr. TROMBETTA-PANIGADI, F. (1987), Antarctic Icebergs and International Law. En: Francioni, F.; Scovazzi, T. (ed.s), *International Law for Antarctica*, Milano, Giuffrè Ed., pp. 427 y ss.
- (40) Cfr. SCOVAZZI, T. (1986), La linea di base normale. En: T. Scovazzi (ed.), *La linea di base del mare territoriale*, Milano, Giuffrè Ed., pp. 50-56.
- (41) BECK, P. J. (1986), *The International Politics of Antarctica*, op. cit., p. 68.
- (42) Se incluyen las islas Pedro I, Shetland del Sur, Orcadas del Sur e isla de las Ballenas.
- (43) Entre otras, las islas Sandwich del Sur, Georgias del Sur, Kerguelen, Marion, Macquaire, Heard, Campbell, Bouvet, Gough, Crozet y Príncipe Eduardo.
- (44) Téngase en cuenta, por ejemplo, que la barrera de hielo de Ross tiene una extensión superior a la de España.
- (45) Artículo I: "Se entenderá por 'alta mar' la parte del mar no perteneciente al mar territorial ni a las aguas interiores de un Estado".
- (46) TAUBENFELD, H. J. (1961), A treaty for Antarctica, op. cit., pp. 285-286; BERMEJO, R. (1990), Le régime juridique de l'Antarctique et ses perspectives du futur. En: Bechkechi (ed.), *Les espaces communs et le droit international*, Argel, p. 135.
- (47) VIGNES, D. (1987), Le régime des ressources biologiques marines de l'Antarctique. En: Francioni, F.; Scovazzi, T. (eds), *International Law for Antarctica*, Milán, Giuffrè ed., p. 346.
- (48) AUBURN, F. M. (1982), *Antarctic Law and Politics*, op. cit., p. 130.
- (49) FREELAND, J. R. (1960), The Antarctic Treaty, op. cit., p. 27; HAYTON, R. D. (1960), The Antarctic Settlement of 1959, op. cit., p. 359-360; HANESSIAN, J. (1960), The Antarctic Treaty 1959, op. cit., p. 471-472; TAUBENFELD, H. J. (1961), A Treaty for Antarctica, op. cit., p. 246; AUBURN, F. M. (1982), *Antarctic Law and Politics*, op. cit., p. 130; THEUTENBERG, B. J. (1984), *The Evolution of the Law of the Sea with Special Regard to the Polar Areas: A Study Concerning Resources and Strategy*, op. cit., p. 67.
- (50) Cfr. KISH, J. (1973), *The Law of International Spaces*, Leiden, p. 180; PALLONNE, F. (1978), Resource exploitation: The Threat to the legal regime of Antarctica, *International Lawyer*, 12, p. 551; AUBURN, F. M. (1982), *Antarctic Law and Politics*, op. cit., p. 138.
- (51) Sobre este Tratado, vide infra, epígrafe III.3.

- (52) Sobre este particular, vide infra, epígrafe III.3.
- (53) Vide AUBURN, F. M. (1972), *The Ross Dependency*, p. 40.
- (54) WILSON, G. P. (1978), Antarctica, the Southern Ocean and the Law of the Sea, *Judge Advocate General Journal*, 30, p. 52; INFANTE CAFFI, M. T. (1983), La plataforma continental antártica. Implicaciones jurídicas para un régimen de recursos minerales. En: F. Orrego Vicuña (ed.), *La Antártica y sus recursos. Problemas científicos, jurídicos y políticos*, Santiago de Chile, pp. 346 y ss.; KOROMA, A. (1988), Safeguarding the Interests of Mankind in the Use of Antarctica. En: R. Wolfrum (ed.), *Antarctic challenge III: conflicting interests, cooperation, environmental protection, economic development*, Berlín, p. 255.
- (55) VAN DER ESSEN, A. (1983), La aplicación del Derecho del Mar en el continente antártico. En: F. Orrego Vicuña (ed.), *La Antártica y sus recursos. Problemas científicos, jurídicos y políticos*, Santiago de Chile, pp. 321-322; VAN DER ESSEN, A. (1985), Les régions arctiques et antarctiques. En: Dupuy, R.; Vignes, D. (ed.s), *Traité du Nouveau Droit de la Mer*, París, p. 487.
- (56) AUBURN, F. M. (1982), *Antarctic Law and Politics*, op. cit., p. 130; THEUTENBERG, B. J. (1984), *The Evolution of the Law of the Sea with Special Regard to the Polar Areas: A Study Concerning Resources and Strategy*, op. cit., p. 67.
- (57) En este sentido, PFISTER DE ARMAS, F. M. (1981), *La situación jurídica de la Antártida y el nuevo Derecho del Mar*, Rosario (Argentina), p. 19 afirma que "En la Antártida el concepto de alta mar no involucra para terceros Estados las mismas libertades de que gozan en otras partes de alta mar. De hecho y de derecho las normas de ese estatuto jurídico que es el Tratado Antártico, se aplican a toda la región situada al sur de los 60° S. incluidas la tierra, las barreras de hielo, el mar territorial, la plataforma continental, los fondos marinos y las zonas que puedan ser consideradas como alta mar; la que queda así sustraída de la aplicación de la norma general. Ello implica una limitación en la región al derecho de terceros. No hay más que señalar la prohibición entre otras de realizar maniobras militares, ensayos de toda clase de armas, combates navales; libertades reconocidas por el Derecho Internacional Público a los Estados en otras zonas de alta mar; así como la amplitud de facultades de las partes consultivas en la zona (inspección, etc.), para ver que ellas importan restricciones mucho más amplias que las que puedan surgir de la Convención de Ginebra de 1958 (...) En consecuencia los terceros Estados o la comunidad internacional no pueden pretender hoy facultades que no les han sido reconocidas por el Derecho Internacional, ni han ejercido durante todos estos años". En igual sentido se ha manifestado VAN DER ESSEN, A. (1983), La aplicación del Derecho del Mar en el continente antártico, op. cit., p. 322, al afirmar que: "El texto actual tiene, por lo tanto, como únicas consecuencias las de prohibir las maniobras aeronavales y los ensayos de armas (artículo I), así como los ensayos nucleares pacíficos y la eliminación de desechos radioactivos (prohibidos por el artículo V) en la zona del Tratado, así como de mantener las libertades de pesca, de navegación y de sobrevuelo de los espacios marinos. Es la interpretación que precisa la fundamentación de la ley belga aprobatoria del Tratado, de fecha 8 de marzo de 1960". Idea que el mismo autor matizó en 1985: "L'article 6 limite l'application à la région au sud du 60ème parallèle, ce qui a pour effet d'y rendre obligatoires les dispositions de nature pacifique. Cela revient à y interdire les manoeuvres aéronavales et les essay d'armes de toutes sortes, comme le dispose l'article 1er - à moins de soutenir qu'ils font partie de la liberté de naviga-

tion. Cella revient aussi à ne pas y permettre d'explosions nucléaires pacifiques, ni l'élimination de déchets radioactifs, interdites par l'article 5. On y maintient toutefois les libertés de pêche, de navigation et de survol", cfr. VAN DER ESSEN, A. (1985), *Les regions arctiques et antarctiques*, op. cit., p. 487.

- (58) N.U. Doc. A/C.1/40/PV. 52, p. 37.
- (59) INFANTE CAFFI, M. T. (1983), *La plataforma continental antártica. Implicaciones jurídicas para un régimen de recursos minerales*, op. cit., p. 346.
- (60) Según el art. 34 del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados: "Un tratado no crea obligaciones ni derechos para un tercer Estado sin su consentimiento".
- (61) Sólomente se han publicado los discursos inaugurales y finales de la Conferencia de Washington, *CONFERENCE on Antarctica*, Washington, october 15 - december 1, 1959 (The), Department of State Publication 7.060, International Organization and Conference Series 13, 77 págs.
- (62) FERRER VIEYRA (1986), *Antártida argentina - Aspectos jurídicos*. En: *Temas de Derecho y Política Internacional*, Buenos Aires, Ed. Indice, p. 177 y ss.; VAN DER ESSEN, A. (1987), *Origine et développement du système antarctique*, op. cit., pp. 12-13.
- (63) Cfr. BECK, P. J. (1986), *The International Politics of Antarctica*, op. cit., pp. 68 y ss.
- (64) Los tratados así celebrados son: el Convenio de Londres de 1 de junio de 1972 sobre la conservación de las focas antárticas; el Convenio de Cambera de 20 de mayo de 1980 sobre la conservación de los recursos marinos vivos antárticos; el Convenio de Wellington de 2 de junio de 1988 para la reglamentación de las actividades sobre recursos minerales antárticos; y el Protocolo de Madrid de 4 de octubre de 1991 al Tratado de la Antártida sobre protección del medio ambiente. Los dos últimos tratados citados no están en vigor todavía. Sobre los mismos, vide BERMEJO, R. (1990), *L'Antarctique et ses ressources minérales: le nouveau cadre juridique*, Genève, 205 pp.; BOU, V. (1990), *The increasing International Community interest in the protection of the Antarctic environment*. En: Francioni, F. (ed.), *International Environmental Law and Antarctica*, Siena (en prensa); BERMEJO, R.; BOU, V. (1992), *El marco jurídico de la cooperación económica antártica: realidades y perspectivas de futuro*, *Anuario argentino de derecho internacional*; BERMEJO, R.; BOU, V. (1993), *Resources, sustainable development and Antarctica*. En: *Ocean Governance: National, Regional, Global Institutional Mechanisms of Sustainable Development in the Oceans* (en prensa).
- (65) Art. 2-4 de la Carta de las Naciones Unidas. Debe recordarse que en virtud del art. 103 de este mismo instrumento legal: "En caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta".
- (66) El art. 301, titulado "Utilización del mar con fines pacíficos"; dispone lo siguiente: "Al ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones de conformidad con esta Convención, los Estados Partes se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas".
- (67) Vide, entre otros, BOCZEK, B. A. (1989), *The Peaceful Purposes Reservation of the UN Convention on the Law of the Sea*, *Ocean Yearbook*, 8, pp. 344 y ss,
- (68) Vide las intervenciones de Ecuador y de Irán en el debate en el Comité Plenario, en NACIO-

- NES UNIDAS (1976), *Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, Documentos oficiales*, 5, Nueva York, pp. 56 y 65-66, respectivamente. Otros países del Tercer Mundo, como Filipinas y Túnez, con mayor realismo afirmaron que con tal fórmula no se podía prohibir toda actividad militar marítima (ibid., pp. 65 y 67 respectivamente), mientras que la mayoría de los países en desarrollo insistieron en la necesidad de definir el contenido de esta fórmula, proponiendo, entre otras cosas, el establecimiento progresivo de zonas de paz y de zonas libres de armamento nuclear, la prohibición de maniobras militares en la alta mar, etc. Vide las intervenciones de los delegados de Madagascar, Irak, Emiratos Arabes Unidos, Somalia, Pakistán, etc, en ibid., pp. 57-58, 59, 63-64, 66 y 66-67, respectivamente.
- (69) Vide, entre otras, las intervenciones, muy similares, de las delegaciones de Estados Unidos, Unión Soviética, Bulgaria, Cuba, etc, en: ibid., pp. 62, 59, 60-61 y 61, respectivamente.
- (70) Pese a que entre los dos artículos existan ligeras diferencias de redacción. El art. 301 utiliza la expresión "principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas", en vez del término "propósitos" del art. 2-4 de la Carta, para referirse no sólo al Capítulo I de la Carta ("Propósitos y principios"), sino a toda ella. Sobre este particular, vide TREVES, T. (1981), *La notion d'utilisation des espaces marins à des fins pacifiques dans le nouveau droit de la mer, Annuaire Français de Droit International*, 26, p. 688.
- (71) Sobre este particular, vide RIPHAGEN, W. (1980), *La navigation dans le nouveau droit de la mer, Revue générale de droit international public*, 84, p. 144; OXMAN, B. H. (1984), *The Regime of Warships under the United Nations Convention on the Law of the Sea, Virginia Journal of International Law*, 24, p. 809; MOMTAZ, D. (1985), *Les forces navales et l'impératif de sécurité dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer*. En: B. Vukas (ed.), *Essays on the New Law of the Sea*, Zagreb, pp. 230 y ss; TREVES, T. (1985), *Le nouveau régime des espaces marins et la circulation des navires*. En: ibid., pp. 202 y ss.; SCOVAZZI, T. (1990), *Elementi di diritto internazionale del mare*, Milano, pp. 67-68; TREVES, T. (1991), *Navigation*. En: R-J Dupuy; D. Vignes (ed.s), *A Handbook on the New Law of the Sea*, vol. 2, Martinus Nijhoff Publishers, pp. 899 y ss.; etc.
- (72) Incluso cabe recordar que una propuesta realizada por Albania, Bulgaria y la Unión Soviética para prohibir las maniobras navales de larga duración cercanas a las costas o en rutas utilizadas para la navegación internacional, fue rechazada en 1958 por 43 votos contra 13, con 9 abstenciones. Vide la propuesta en U.N. Doc. A/Conf.13/C.2/L.32, reproducida en NACIONES UNIDAS (1958), *Conferencia sobre el derecho del mar. Documentos oficiales*.
- (73) Vide, entre otros, el Convenio entre el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para prevenir incidentes en el mar más allá del mar territorial (Londres, 15-VII-1986), reproducido en *Boletín del Derecho del Mar*, 10, pp. 102 y ss.; el Acuerdo entre el Gobierno de la República Federal de Alemania y el Gobierno de la U.R.S.S. relativo a la prevención de accidentes en el mar fuera de las aguas territoriales (Moscú, 25-X-1988), reproducido en *B.D.M.*, 14, pp. 15 y ss.; el Acuerdo entre el Gobierno de la U.R.S.S. y el Gobierno de la República Francesa en relación con la prevención de incidentes en el mar fuera de las aguas territoriales (París, 4-VII-1989), en *B.D.M.*, 16, pp. 24 y ss.; el Acuerdo entre el Gobierno de la República Italiana y el Gobierno de la U.R.S.S. en relación con la prevención de incidentes en el mar fuera de las aguas territoriales (Roma, 30-XI-1989), en *B.D.M.*, 16, pp. 36 y ss.; el Acuerdo de 20-XI-1989 entre el



Gobierno de Canadá y el Gobierno de la U.R.S.S. relativo a la prevención de incidentes en el mar fuera de las aguas territoriales, en *B.D.M.*, 18, pp. 16 y ss.; el Acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de la U.R.S.S. para la prevención de incidentes en la mar fuera del mar territorial (B.O.E., 4-XI-1991); etc. Toda esta práctica convencional bilateral tiene su origen en el Acuerdo de 22-X-1971 entre el Gobierno de los EE.UU. y el Gobierno de la U.R.S.S. para la prevención de incidentes en y sobre la alta mar (reproducido en *International Legal Materials*, 11, pp. 778-783), renegociado en 1989 (*I.L.M.*, 28, pp. 877-895).

- (74) En este punto, la doctrina es unánime. Vide, inter alia, DORE, I: *International Law and the Preservation of the Ocean Space and Outer Space as Zones of Peace*, *Cornell International Law Journal*, 15, pp. 1-61; RICHARDSON, E. L. (1982), *Law of the Sea: Navigation and Other Traditional Security Considerations*, *San Diego Law Review*, 19, p. 553; BARABOLYA, P. (1985), *Changes in the Legal Regime of the Sea and Their Influence on Navigation*. En: B. Vukas (ed.), *Essays on the New Law of the Sea*, Zagreb, p. 189; FRANCIONI, F. (1985), *Peacetime Use of Force, Military Activities and the Law of the Sea*, *Cornell International Law Journal*, 18, pp. 203 y ss.; MURAUULT, R. W. G. (1985), *The Military Aspects of the UN Law of the Sea Convention*, *Netherlands International Law Review*, 32, pp. 78-99; EVENSEN, J. (1986), *The Law of the Sea Regime*. En: R. B. Byers (ed.), *The Denuclearisation of the Oceans*, New York, pp. 77-87; etc.
- (75) El propio Ponente de la Comisión de Derecho Internacional, Sr. J. P. A. François, señaló en el curso de los trabajos de codificación que: “la libertad del Alta Mar no incluye el derecho a utilizar el Alta Mar de manera que impida de modo razonable a otros Estados el disfrute de tal libertad. La investigación científica y el ensayo de nuevas armas en el alta mar sólo pueden permitirse bajo esta condición”.
- (76) Este Tratado se firmó en Moscú el 5 de agosto de 1963 por la Unión Soviética, Estados Unidos y el Reino Unido. El texto del Tratado puede consultarse en *U.N.T.S.*, 48/43. Vide FISCHER, G. (1963), *L'interdiction partielle des essais nucléaires*, *Annuaire Français de Droit International*, 1963, pp. 11 y ss.; SCHWELB, E. (1964), *The Nuclear Test Ban Treaty and International Law*, *American Journal of International Law*, 1964.
- (77) Tratándose de la alta mar, parece conveniente hacer siquiera una breve referencia al Tratado sobre prohibición de emplazar armas nucleares y otras armas de destrucción en masa en los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo (Londres, Moscú, Washington, 11-II-1971). El texto de este Tratado se encuentra en el B.O.E. de 5-XI-1987 y, según su art. 1.-1 los Estados partes “se comprometen a no instalar ni emplazar en los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo ... armas nucleares ni ningún otro tipo de armas de destrucción en masa, así como tampoco estructuras, instalaciones de lanzamiento ni otras instalaciones destinadas expresamente a almacenar, ensayar o utilizar dichas armas”. Sobre este Tratado, vide MARIN LOPEZ, A. (1974), *Utilización pacífica de los fondos marinos*. En: A. Poch (ed.), *La actual revisión del derecho del mar. Una perspectiva española*, Madrid, 1/2, pp. 323 y ss.; MIGLIORINO, L. (1980), *Fondi marini e armi di distruzione di massa*, Milano, 196 pp.; MANN BORGESE, E. (1986), *The Sea-Bed Treaty and the Law of the Sea*. En R. B. Byers (ed.), *The Denuclearisation of the Oceans*, New York, pp. 88 y ss.; BLANC ALTEMIR, A. (1992), *El patrimonio común de la humanidad. Hacia un régimen jurídico internacional para su gestión*, Barcelona, pp. 93 y ss.; etc. De la interpretación conjunta de este Tratado y del Tratado de 1963 sobre prohibición

- de pruebas con armas nucleares, autores como BROWN, N. (1971), *Military Uses of the Ocean Floor*. En: *Pacem in Maribus I*, Malta, pp. 115-121 y TREVES, T. (1980), *Military Installations, Structures and Devices on the Sea-bed*, *American Journal of International Law*, 74, pp. 820-822, han llegado a la conclusión de que los ensayos nucleares están igualmente prohibidos en el suelo y subsuelo de la alta mar.
- (78) Vide su art. 25.
- (79) Esta norma sí se ha recogido expresamente en algún convenio de ámbito regional, como el art. 9-1 del Convenio sobre la protección del medio marino en la zona del mar Báltico (Helsinki, 22-III-1974) o el Anexo I, ap. 7 del Protocolo sobre la prevención de la contaminación del Mar Mediterráneo causado por vertidos desde buques y aeronaves (Barcelona, 16-II-1976). Sobre los mismos, vide YTURRIAGA, J. A. (1979), *Regional Conventions on the Protection of Marine Environment*, *R.C.A.D.I.*, 162, pp. 319 y ss.
- (80) Sobre este particular, vide JUSTE RUIZ, J. (1985), El vertimiento de desechos radioactivos en el mar: aspectos de Derecho Internacional, *Cursos de Derecho Internacional de Vitoria-Gasteiz*, 1985, pp. 223 y ss.; MARIÑO MENENDEZ, F. (1990), El objeto de las obligaciones establecidas en la Parte XII del Convenio de Montego Bay. En: C. Jiménez Piernas (ed.), *La responsabilidad internacional*, Alicante, pp. 179 y ss.
- (81) En las observaciones de los Estados a los trabajos codificadores de la C.D.I., la Unión Soviética afirmó explícitamente que: "la contaminación de los océanos mediante la evacuación de desechos radioactivos constituye una violación de la libertad del alta mar y constituye por lo tanto una utilización no permitida". Doctrinalmente, se ha considerado que la debida consideración para con los intereses de otros Estados, exigida en el art. 2 del Convenio de 1958, aunque no prohíbe expresamente la evacuación de desechos radioactivos en los océanos, puede ser considerado perfectamente como contrario a un standard razonable. Cfr. MCDUGAL; BURKE (1962), *Public Order of the Oceans*, pp. 758 y ss. Citados en LDC 7/INF. 2, 23 de septiembre de 1982. *Evaluation of Oceanic Radioactive Dumping Programmes Submitted jointly by Kiribati and Nauru*, pp. 125-126.
- (82) El texto del Convenio, que entró en vigor el 30 de agosto de 1975, puede consultarse en B.O.E. de 10-XI-1975. Sobre el mismo, vide YTURRIAGA BARBERAN, J. A. (1973), El Convenio de Londres de 1972 sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias, *Anuario IHLADI*, 4, pp. 343-433; TIMMAGENIS, G. J. (1980), *International Control of Marine Pollution*, New York/Netherlands, vol. 1, pp. 171-287; JUSTE RUIZ, J. (1985), El vertimiento de desechos radioactivos en el mar: aspectos de Derecho Internacional, op. cit., pp. 211 y ss.; WELSCH, H. (1985), *The London Dumping Convention and Sub-Seabed Disposal of Radioactive Waste*, *German Yearbook of International Law*, 28, pp. 322-354.
- (83) Según la Resolución LDC 7/12, se "solicita la suspensión de todos los vertidos en el mar de sustancias radioactivas, quedando pendiente la presentación a las Partes Firmantes del Informe Final de la Reunión de expertos sobre sustancias radioactivas en relación con el Convenio de Londres sobre vertidos". Cuando esta Resolución se adoptó, solo Bélgica, Países Bajos, Suiza y Reino Unido realizaban tales operaciones. Previamente, también fueron desarrolladas por la R.F. de Alemania (en 1967), Francia (hasta 1969), Italia y Suecia (en 1969) y EE.UU. (hasta 1970). Desde la adopción de la Resolución, no se ha realizado ninguna operación de

vertimiento de estas substancias. Sobre los problemas planteados por esta Resolución, vide JUSTE RUIZ, J. (1990), Responsabilidad internacional de los Estados y daños al medio ambiente: problemas de atribución. En: C. Jiménez Piernas (ed.), *La responsabilidad internacional*, Alicante, pp. 113-136; ibid. (1992), International Liability for Damage Resulting from Dumping Radioactive Wastes at Sea, *Yearbook of Maritime Law*, 4, pp. 155-182; ibid. (1992), L'immersion en mer de déchets radioactifs et responsabilité internationale. En: F. Francioni; T. Scovazzi (ed.s), *International Responsibility for Environmental Harm*, Graham & Trotman, pp. 207-230.

- (84) Entre otras, se han manifestado en este sentido las delegaciones nacionales de Nueva Zelanda (N.U. Doc. A/C.1/38/PV.42, pp. 71-72; A/C.1/40/PV.50, p. 7; y A/C.1/40/PV. 52, pp. 54-56); Polonia (N.U. Doc. A/C.1/38/PV.43, p. 18; y A/C.1/40/PV.52, pp. 5-6); Unión Soviética (N.U. Doc. A/C.1/38/PV.43, pp. 22-23; A/C.1/39/PV.53, pp. 38-41; y A/C.1/40/PV.53, p. 21); Estados Unidos de América (N.U. Doc. A/C.1/38/PV.45, p. 7; A/C.1/39/PV. 53, pp. 58-60; y A/C.1/40/PV. 51, p. 3); Australia (N.U. Doc. A/C.1/38/PV.45, pp. 28-30; y A/C.1/39/PV.50, p. 31); República Federal de Alemania (N.U. Doc. A/C.1/38/PV. 45, p. 46); Malasia (N.U. Doc. A/C.1/39/PV.50, pp. 11-12); Sri Lanka (ibid., pp. 41-42); Chile (ibid., pp. 51-57); India (N.U. Doc. A/C.1/39/PV.53, pp. 3-5); Argentina (ibid., pp. 8-10); Nigeria (ibid., pp. 17 y 23); Trinidad y Tobago (ibid., p. 26); Checoslovaquia (ibid., pp. 27-28); Suecia (ibid., p. 33); Camerún (ibid., p. 57); Bélgica (ibid., p. 68); Pakistán (N.U. Doc. A/C.1/39/PV.54, p. 17); Bolivia (N.U. Doc. A/C.1/40/PV. 48, p. 51); Tailandia (N.U. Doc. A/C.1/49/PV.51, p. 22); Ghana (N.U. Doc. A/C.1/40/PV.52, p. 22); República Democrática de Alemania (ibid., pp. 37-38); Indonesia (ibid., p. 42); Zimbabwe (N.U. Doc. A/C.1/42/PV. 47, p. 13); Bután (N.U. Doc. A/C.1/42/PV.48, p. 42); Australia, en nombre de los Estados Partes en el Tratado de la Antártida (N.U. Doc. A/C.1/43/PV.46, p. 16). Sobre este debate, vide BERMEJO, R. (1990), The Antarctic system: crisis or success of multilateralism? *Comparative and International Law Journal of Southern Africa*, 22, pp. 1-31.
- (85) Vide el art. 3 del Acuerdo que debe regir las actividades de los Estados en la luna y otros cuerpos celestes, el art. IV del Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la luna y otros cuerpos celestes, y los arts 88 y 141 del Convenio de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar.
- (86) El representante de la delegación de Filipinas ante la Organización de las Naciones Unidas, afirmó que: "Al mantener la región libre de armas nucleares, el Tratado fue precursor de otros acuerdos, como el Tratado de Tlatelolco y el de Rarotonga". Cfr. N.U. Doc. A/C.1/43/PV.44, pp. 43-45. En idéntico sentido, vide la intervención del representante de la delegación de Fiji, en N.U. Doc. A/C.1/43/PV.46, p. 6, así como SCHMIED Y ZAPATA, J. (1987), La Antártida en el sistema internacional: Los desafíos de la década del 1990. En: J. Castellví (dir.), *Actas del segundo symposium español de estudios antárticos*, Madrid, C.S.I.C., p. 243.
- (87) El texto del Tratado está reproducido en *U.N.T.S.*, Vol. 634, nº 9.068, pp. 281-423. Sobre el Tratado de Tlatelolco, vide GARCIA ROBLES, A. (1971), Mesure de désarmement dans les zones particulières: le Traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine, *R.C.A.D.I.*, 133, pp. 43-134; REDICK, J. R. (1975), Regional Nuclear Arms Control in Latin America, *International Organization*, 29, pp. 415-445; GOLDBLAT, J.; MILLAN, V. (1982),

- Militarization and Arms Control in Latin America, *Stockholm International Peace Research Institute Yearbook*, 1982, pp. 393-425.
- (88) El texto del Tratado está reproducido en *Boletín del Derecho del Mar*, 6, pp. 24-39 y en NACIONES UNIDAS (1987), *El Derecho del Mar. Acontecimientos recientes en la práctica de los Estados*, pp. 202-216. Sobre el Tratado de Rarotonga, vide FISCHER, G. (1986), La zone dénucléarisée du Pacifique Sud, *Annuaire Français du Droit International*, 1986, pp. 23-57; GIBBS, E. L. (1986), In Furtherance of a Nuclear-Free Zone Precedent: The South Pacific Nuclear-Free Zone, *Boston University International Law Journal*, 4, pp. 387-431; SUTHERLAND, W. (1986), The Southern Pacific Nuclear Free Zone Treaty, *International Journal of Estuarine and Coastal Law*, 1, pp. 220 y ss.